**PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
NÚMERO: 14/2012.**

SERVIDORA PÚBLICA:
*****.

México, Distrito Federal, a ocho de agosto de dos mil trece.

VISTOS; para emitir resolución definitiva en el procedimiento de responsabilidad administrativa **14/2012**; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Denuncia. Mediante oficio CSCJN/DGRARP/DRP/0088/2012 del veintidós de febrero de dos mil doce, el Director de Registro Patrimonial informó a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la exservidora pública *****, con el cargo de *****, puesto de confianza, adscrita a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Matamoros, Tamaulipas, **presentó en forma extemporánea** su declaración de inicio en el cargo; por ese motivo se ordenó la apertura del cuaderno de investigación **C.I.14/2012.**

SEGUNDO. Procedimiento. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil doce, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó iniciar a trámite el procedimiento de responsabilidad administrativa **14/2012** en contra de la persona señalada, por estimar la existencia de elementos

suficientes para presumir que incurrió en la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 8, fracción XV, en relación con el 37, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como, en relación a los artículos 50, fracción XXV, y 51, fracción I, del ACUERDO NÚMERO 9/2005, DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL CINCO DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RELATIVO A LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE ALTO TRIBUNAL Y DEL SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE ÉSTOS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 222 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Se ordenó requerir a la citada exservidora pública a efecto de que en el plazo de cinco días hábiles rindiera el informe relativo y exhibiera las pruebas que estimara pertinentes.

En auto treinta y uno de octubre de dos mil doce, el Contralor tuvo por rendido en tiempo y forma el informe requerido a dicha exservidora pública, en el que ofreció diversas pruebas, mismas que se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza y, por proveído de veinticinco de junio de dos mil trece, se declaró cerrada la instrucción en términos del artículo 39, segundo párrafo, del citado Acuerdo Plenario 9/2005 y artículo 33, fracción XV, del Reglamento Interior en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por diverso auto del quince de julio de dos mil

trece se emitió el dictamen respectivo, en el que se propuso sancionar con **Apercibimiento Privado**.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXI, y 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en los artículos 23 y 25, segundo párrafo, del Acuerdo Plenario 9/2005, en tanto se trata de una exservidora pública de este Alto Tribunal a la que se le atribuye una conducta infractora que no está expresamente catalogada como grave, ni se considera como tal en el caso concreto.

SEGUNDO. Marco normativo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo Plenario 9/2005, en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en él serán aplicables la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en lo que no se oponga a esta última, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su caso, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, deberá acudir a los principios generales de derecho, salvo por lo que se refiere a las causas de responsabilidad y sanciones.

TERCERO. Análisis de la conducta atribuida a la exservidora pública. Del auto que dio inicio al presente procedimiento de responsabilidad administrativa, se advierte

que la conducta que se le atribuye a la exservidora de mérito es la prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 8, fracción XV, en relación con el 37, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; así como, en relación a los artículos 50, fracción XXV, y 51, fracción I, del Acuerdo Plenario 9/2005 de este Alto Tribunal, de presentar la declaración de inicio en el encargo dentro de los sesenta días naturales siguientes en que se dé ese supuesto, por tanto, se tiene que entre los cargos obligados está cualquiera en que se realicen actividades vinculadas con el manejo de recursos públicos, con independencia de su denominación, hipótesis en la que se ubican quienes laboran en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como fue el caso de *****.

De las constancias que obran en autos, las que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93, fracción II, 197, 202 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende

- A.** ***** recibió nombramiento interino de, Rango ***** F, puesto de confianza, con efectos a partir del veintidós de septiembre al dieciocho de diciembre de dos mil once, en sustitución de ***** quien se encuentra de licencia con goce de sueldo, por ***** , adscrita a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Matamoros, Tamaulipas (copia certificada visible a foja 25 del expediente principal), el cual dejó de ocupar el dieciocho de diciembre de

dos mil once por término de nombramiento (foja 51 del expediente principal) y que hasta esa fecha seguía omisa de hacer dicha declaración de inicio en el encargo.

ACUERDO GENERAL PLENARIO 9/2005

“Artículo 50. *Tienen obligación de presentar ante la Suprema Corte declaración de situación patrimonial, bajo protesta de decir la verdad, los siguientes servidores públicos:*

(...)

XXV. *Con independencia de la denominación del puesto, todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, presupuestales, valores y fondos de la Federación, realicen actividades de inspección o vigilancia, lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, así como quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos; y,*

Artículo 51. *La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos;*

(...)

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del;

a) Ingreso al servicio público por primera vez (...).”

De la interpretación de los preceptos transcritos puede concluirse que la obligación en comento, consiste en presentar con oportunidad y veracidad declaraciones de situación patrimonial, entre ellas, la declaración de inicio en el plazo de sesenta días naturales siguientes a aquél en que se toma posesión del cargo, además, el artículo 50, fracción XXV del citado Acuerdo Plenario, dispone que entre los

obligados de este Alto Tribunal, están quienes ocupen “Con independencia de la denominación del puesto, todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos presupuestales, valores y fondos de la Federación; realizan actividades de inspección, o vigilancia, lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, así como quienes intervengan en adjudicación de pedidos o contratos”.

Sin embargo, no lo hizo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de la posesión, sino hasta el diecinueve de enero de dos mil doce (foja 5 del expediente principal).

B. Del oficio CSCJN/DGRARP/DRP/088/2012 de veintidós de febrero de dos mil once que emitió el Director de Registro Patrimonial de este Alto Tribunal se acredita que ***** no había presentado su declaración de inicio en el encargo el veintiuno de noviembre de dos mil once (foja 1 del expediente principal).

C. Del oficio CSCJN/DGRARP/DRP/2763/2011 de cuatro de noviembre de dos mil once, suscrito por la Directora de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial se acredita que se le informó a la infractora la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial.

D. En el informe que presentó ***** el veintinueve de octubre de dos mil doce, destaca:

“... Es cierto el hecho de haber presentado hasta el día 19 de enero del 2012 la declaración de situación patrimonial de inicio, como se señala en la foja 6 del proveído de 02 de octubre del 2012 que nos ocupa y con una copia simple de la declaración de situación patrimonial de inicio elaborada por la suscrita el día 16 de Enero de 2012.

“... La razón por la cual la declaración de situación patrimonial de inicio fue presentada extemporáneamente es por la falta de experiencia en el servicio público...”

En tal orden, existen elementos suficientes para tener por demostrado que la exservidora pública incumplió con la obligación de presentar en tiempo su declaración de inicio en el encargo, conducta que encuadra en el supuesto de responsabilidad administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8, fracción XV, y 37, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 50, fracción XXV, y 51, fracción I, del Acuerdo Plenario 9/2005 de este Alto Tribunal.

CUARTO. Sanción. Al quedar demostrada la infracción administrativa atribuida a *****, se procede a individualizar la sanción que le corresponde conforme a lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos, en relación con los artículos 45 y 46 del Acuerdo Plenario 9/2005, en los siguientes términos:

a) Gravedad de la sanción. La conducta atribuida a la infractora no está expresamente tipificada como grave, toda vez que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 131, fracciones I a VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ni 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y en el caso concreto tampoco se le consideró así.

b) Nivel jerárquico y antigüedad en el servicio. De las copias fotostáticas certificadas del expediente personal de la infractora que obran en autos, se advierte que ingresó a laborar en este Alto Tribunal el veintidós de septiembre de dos mil once con el puesto de *****, puesto de confianza, por el término de tres meses, adscrita a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Matamoros, Tamaulipas, el cual dejó de ocupar el dieciocho de diciembre de dos mil once, (foja 25 y 51 del expediente principal).

c) Condiciones exteriores y los medios de ejecución. De las constancias que obran en autos, se advierte que la infractora no presentó su declaración de inicio de situación patrimonial dentro del plazo previsto; sin embargo, se considera que no tuvo la intención de evadir la

fiscalización de su patrimonio en atención a que finalmente sí la presentó en forma extemporánea el diecinueve de enero de dos mil doce (foja 5 del expediente principal).

d) Reincidencia. Del registro de servidores públicos sancionados no se advierte que ***** lo haya sido previamente con motivo de alguna falta administrativa.

e) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

En la especie no existe prueba de que la infractora hubiese obtenido algún beneficio o lucro indebido, o que hubiera ocasionado daño o perjuicio económico a este Alto Tribunal, con motivo de la infracción en que incurrió, máxime que la falta es estrictamente formal.

En mérito de las consideraciones que anteceden y atendiendo a la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan el deber que se impone a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de presentar su declaración de inicio de situación patrimonial en el encargo dentro de los sesenta días naturales a partir de que se dé ese supuesto, así como a la conducta procesal observada por la infractora durante el desarrollo de este procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXI, 133, fracción II, 135 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 45, fracción II, y 46 del Acuerdo Plenario 9/2005, esta Presidencia estima que se debe

imponer a la infractora la sanción de **Apercibimiento Privado**.

Asimismo, deberá remitirse copia certificada de la presente resolución a la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que sea agregada al expediente de *****.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO. *****, incurrió en la falta administrativa materia del presente procedimiento.

SEGUNDO. Se impone a ***** la sanción de **Apercibimiento Privado**.

Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal para los efectos que procedan y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien actúa con el Contador Público Guillermo Alejandro Posadas Espinosa, Contralor de este Alto Tribunal que da fe.

“En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracción II, 13,14 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.

Esta hoja corresponde al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 14/2012, instaurado en contra de ***** . Conste.

AFBR/JGCR/JHT*plg.